TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C.

SALA MIXTA

Magistrada Sustanciadora: LUZ MARINA IBÁÑEZ HERNÁNDEZ

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE EL JUZGADO CINCUENTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD Y EL JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO, AMBOS DE BOGOTÁ

Bogotá D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Procede la Corporación a decidir el conflicto de competencia negativo surgido entre el Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Oralidad y el Juzgado Catorce Laboral del Circuito, ambos de Bogotá, para conocer de la demanda promovida por David Alexander Martínez Pérez en contra del Consorcio FORTUL 2016.

I. ANTECEDENTES

El señor David Alexander Martínez Pérez, por intermedio de apoderado judicial promovió demanda ordinaria de carácter civil en contra del Consorcio Fortul 2016 para que se declare que: i) entre las partes existió un contrato de obra, cuyo objeto fue la construcción del batallón especial energético vial No. 14 en el municipio de Fortul, ii) el incumplimiento del demandado y en consecuencia, se condene a la suma de \$112'295751,89, correspondiente al acta de obra No. 1 - corte No. 10, del periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2018 al 24 de junio de 2019, intereses comerciales, \$12'304.468 por cobros pendientes por pagar una vez terminados los trabajos y costas del proceso.

Como fundamento de las pretensiones, en síntesis, indicó lo siguiente:

La Agencia Logística de Las Fuerzas Militares y el Consorcio FORTUL 2016, conformado por la sociedad comercial de derecho privado Constructora INGARCON Ltda. y el señor Ismael Enrique Gutiérrez, celebraron contrato de obra civil, cuyo objeto fue la *"construcción del batallón especial energético vial No° 14 en el municipio de Fortul- Arauca"*. El representante legal de la sociedad consorciada lo invitó a contratar con el Consorcio FORTUL 2016, en ejecución de mano de obra de la construcción del batallón, de suerte que en su calidad de ingeniero civil de larga experiencia inició los trabajos, tal como se corrobora en el corte de Obra No 1, posteriormente, se realizó adición de actividades no contratadas inicialmente, autorizadas previa solicitud verbal del profesional residente Arquitecto Fredy Díaz y el Director de Obra y consorciado el Ingeniero Ismael Gutiérrez, según reposa en los documentos de corte de Obra No. 2 al 9, donde queda perfeccionado y aprobado costos, actividades ejecutadas según instrucciones verbales y cuantificadas de acuerdo a cada corte de obra.

Lo anterior se perfeccionaba con la presentación de la cuenta de cobro, previa aprobación de los integrantes del área técnica del contrato, tanto por el consorcio Fortul 2016, como por parte suya en su condición de contratista, quien siempre realizó la proyección de las cantidades ejecutadas, según solicitudes verbales, las cuales se llevaban a su ejecución total para proyección de acta y posterior pago.

Agregó que, él y los demandados pactaron adicionar actividades y cantidades según el desarrollo de la obra que permanecieron estipulados verbalmente y llevados a formalización en Formato Acta de obra Contratistas según corte No 2 al 10. De acuerdo a los cortes de obra entre el 1 al 10, se ejecutó un descuento presuntamente por una retención de garantía, situación que no fue estipulada en minuta contractual, la que se aplicó arbitrariamente coactando los pagos de los cortes de obra previa suscripción en Formato Acta de Obra Contratistas.

Dentro de los cobros pendientes por pagar, se encuentran las detenciones arbitrarias por valor de \$12.304.468. El 1 y 2 de noviembre de 2019, realizó

la entrega oficial a los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. El 5 de agosto de 2020, en conversación telefónica con el representante del consorcio, le afirmó que realizaría abono a la cuenta pendiente, quien le solicitó que presentara nuevamente la solicitud de cobro, debido a que no contaba con los soportes que aseguraban el valor adeudado, por ende, reenvió la cuenta de cobro y el formato acta de contratistas al correo electrónico ingarcon@hotmail.com, reiterado el 09 de julio de 2021 por el mismo medio.

Dentro del contrato se generaron gastos por concepto de *FORMATO ACTA DE OBRA CONTRATISTAS* corte de obra No. 10, entre el 12 de diciembre de 2018 y 24 de junio de 2019, de lo cual hasta el momento se le deuda la suma de \$112.295.751, 89.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

Por reparto el asunto correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Fortul- Arauca, quién por auto del 17 de agosto de 2022, lo rechazó por competencia y remitió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Saravena- Arauca (archivo 4 Carpeta 02 – Demandas y Anexos).

Seguidamente, obra auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca- Sala Única de Decisión, mediante el cual decidió el conflicto de competencia suscitado entre los JUZGADOS PROMISCOU MUNICIPAL DE FORTUL y PROMISCOU DEL CIRCUITO DE SARAVENA, pues el primero de ellos rechazó la competencia por corresponder a materia laboral, y el segundo, el 3 de octubre de 2022 suscitó el conflicto al argumentar que el demandante ejerce una acción civil en la que se pretende un contrato de obra. Para resolver lo pertinente, dicha Corporación indicó que el conflicto entre las partes tuvo su origen en el presunto incumplimiento de un contrato de obra civil celebrado de manera verbal, sin que el tema se enmarque en ninguno de los asuntos enlistados en el artículo 2° del CPTS, de ahí que, para la fijación del juez natural, el actor podía escoger entre el

lugar del cumplimiento del negocio jurídico o el domicilio del sujeto demandado, de manera que, dispuso DECLARAR prematuro el planteamiento del conflicto negativo de competencia, y ordenó la devolución de las diligencias al juzgado inicial, para que adoptara las medidas de saneamiento que estimara procedentes, tendientes a clarificar las variables relevantes para la atribución de competencia del asunto. (archivo 7 Carpeta 02 – Demandas y Anexos).

Recibido nuevamente el proceso por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de Fortul, en auto del 1° de noviembre de 2022 rechazó la demanda y remitió por competencia el expediente a los Juzgados Promiscuo Municipales de Bogotá, tras considerar que el domicilio del Consorcio demandado se encuentra en dicha ciudad. (archivo 9 Carpeta 2 – Demanda y Anexos)

El proceso fue repartido al Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Bogotá, autoridad judicial que en proveído de 7 de diciembre de 2022 rechazó de plano la demanda y la remitió a los Juzgados de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, bajo el argumento que si bien tratándose de competencia territorial, el proceso debe ser asumido por un Juez de Bogotá, no es la especialidad civil la encargada de conocer el conflicto de índole laboral (archivo 14 Carpeta 02 – Demandas y Anexos).

El Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá rechazó la demanda por carecer de competencia en razón de la cuantía y envió el trámite a la Oficina Judicial- Reparto para que fuera repartido entre los Jueces Laborales del Circuito de Bogotá. (archivo 17 Carpeta 02 – Demandas y Anexos).

Finalmente, el conocimiento le correspondió al Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, quien, mediante auto del 22 de noviembre de 2023, rechazó la demanda por carecer de competencia y propuso el conflicto negativo con el Juzgado 56 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, tras argumentar que el asunto no corresponde a una relación laboral de honorarios derivados de una prestación personal del demandante, pues la

naturaleza del litigio no es otra que obtener un pago derivado de un incumplimiento contractual como lo manifiesta el mismo actor (archivo 5)

Con fundamento en ello, remitió el expediente a la Sala Mixta de este Tribunal, para resolver lo pertinente.

C O N S I D E R A C I O N E S

De conformidad con lo estipulado en el artículo 18 inciso 2° de la Ley 270 de 1996, el Tribunal a través de las Salas Mixtas es competente para desatar el conflicto negativo de competencia suscitado entre juzgados dentro de la jurisdicción ordinaria y el mismo distrito judicial como ocurre en este caso entre el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal, también de esta ciudad.

Así, lo primero que se debe indicar, es que el conflicto que debe resolver la Sala se circunscribe en definir a qué autoridad le compete decidir el litigio en el que la demandante, solicita que se declare la existencia de un contrato de obra y el incumplimiento del mismo por parte de los contratantes, en consecuencia, el pago derivado de su ejecución.

Para resolver lo que en derecho corresponda, forzoso resulta señalar que conforme al numeral 6° del artículo 2 del CPTSS, a la jurisdicción del trabajo le corresponde entre otros asuntos conocer de «*Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios **o remuneraciones** por servicios personales de carácter privado, **cualquiera que sea la relación que los motive***» (subrayado de esta Sala), punto en el que la Sala Laboral de la CSJ precisó en proveído AL805- 2019 que la norma en mención tiene como finalidad:

*“...unificar en una sola jurisdicción el conocimiento y definición de los asuntos derivados de **una prestación personal de servicios de una persona natural** a otra de igual condición o jurídica, bien sea que en dicha prestación se presentara o no el elemento de la subordinación, pues lo primordial era la **regulación del trabajo humano en sus diferentes facetas**, el cual se*

convierte en el origen y en el motor de la jurisdicción laboral (CSJ 26 mar. 2004, rad.21124”).

Bajo el anterior entendido, en el caso concreto se advierte el cumplimiento de los presupuestos de la norma en cita, toda vez que corresponde a un conflicto derivado de la prestación personal de un servicio de una persona natural que reclama el cumplimiento del pago del contrato de obra, sin que sea necesario que lo que se persiga corresponda a honorarios, sino a una remuneración derivada de esa ejecución, recalando que no interesa la relación jurídica que conllevó a la prestación del servicio, sino que ésta se desarrolle de manera personal y privada, siendo la regla para que la jurisdicción ordinaria laboral conozca de esa regulación del trabajo humano, se insiste, sin miramientos a que se pretenda la declaratoria de un trabajo subordinado o que sea exclusivo al pago de honorarios.

De suerte que los argumentos esgrimidos por la Juez Catorce Laboral del Circuito de Bogotá para rechazar el conocimiento no resultan ajustadas a las normas y decisiones adoptadas por nuestro órgano de cierre al respecto. En primer lugar, dicha autoridad judicial fundamentó la falta de competencia, en que las pretensiones de la demanda se dirigen a la declaratoria de un contrato de obra civil y no una relación laboral, al respecto, la Sala aclara que precisamente el numeral 6° del artículo 2 del CPTSS antes descrito, señaló que la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es la competente para conocer de los conflictos generados de los servicios personales de carácter privado, sin importar la clase de relación que los motivos, es decir sea esta laboral, civil o de otro tipo, pues como quedó asentado en la jurisprudencia referida, la finalidad de dicho precepto legal es regular el trabajo humano en cualquier faceta y por ende, el legislador bajo la libertad de configuración asignó esta clase de asuntos al juez del trabajo.

Y con relación al segundo argumento, esgrimido por el Juez 14 Laboral del Circuito, referido a que la naturaleza del litigio no es otra que obtener un pago derivado de un incumplimiento contractual, aspecto que tampoco la excluye de su conocimiento, pues la citada norma, hace mención a la competencia en materia laboral en relaciones privadas distintas a la laboral cuando se persiga el reconocimiento de “remuneraciones”.

Sobre este aspecto, señaló la Sala Laboral de la CSJ en sentencia SL-2385-2018:

“En efecto, el conflicto jurídico originado en el reconocimiento y pago «*de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado*», indudablemente **abarca o comprende toda clase de obligaciones que surjan de la ejecución o inejecución de tales contratos**, tan cierto es ello, que, se insiste, el legislador no limitó la competencia de la jurisdicción al reconocimiento y cancelación de los solos honorarios como lo entiende el *ad quem*, sino que fue más allá, tanto así que incluyó la acepción «*remuneraciones*», que desde luego no puede entenderse que son los mismos honorarios, pues a ellos hizo alusión con antelación, sino que debe colegirse que son los demás emolumentos que tienen como causa eficiente el contrato de prestación de servicios de carácter privado, llámese cualquier otro pago, sanciones, multas, etc.”

Por consiguiente, como no se puso en duda el factor territorial previsto en el artículo 28 del CGP, se concluye que la presente controversia debe ser conocida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá por lo que se dispondrá la remisión de las diligencias a esa autoridad y comunicar de lo decidido al Cincuenta y Seis Civil Municipal de Bogotá

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Mixta,

R E S U E L V E

PRIMERO. - Dirimir el conflicto de competencia negativo, surgido entre Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de la misma ciudad y el asignándosela al último de los

citados, para conocer de la demanda promovida por David Alexander Martínez Pérez en contra del Consorcio FORTUL 2016.

SEGUNDO. - Por secretaría, remítanse las diligencias al Juzgado Catorce Laboral del Circuito Bogotá y comuníquese lo aquí decidido al Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Bogotá,

Notifíquese y Cúmplase.

LUZ MARINA IBAÑEZ HERNANDEZ
Magistrada

FABIO DAVID BERNAL SUAREZ
Magistrado

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA
Magistrada